TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Bogotá, D.C., ocho (8) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

Ref: Verbal de María Teresa Sepúlveda Castellanos c/. Oscar Yesid Barón Rodríguez. Exp. 25899-31-10-002-2018-00104-03.

Decídese el recurso de reposición interpuesto por la demandante contra el auto de 20 de agosto pasado, por el cual se decretaron algunas pruebas solicitadas por el demandado.

A cuyo propósito se considera:

Por el auto recurrido, el Tribunal dispuso tener como pruebas los documentos relativos al cobro prejurídico realizado por Embriones Invitro de Colombia, así como las copias de los procesos ejecutivos 2019-00341, 2019-073 y 2019-046 promovidos contra el demandado, y una ecografía y un pantallazo de la Rues donde consta la renovación realizada por la demandante; la decisión tuvo en cuenta que la solicitud probatoria sobre estos elementos de prueba cumple con los requisitos señalados en la norma para proveer en este sentido en el trámite de la segunda instancia, como quiera que se trata de hechos acaecidos con posterioridad a la oportunidad con que contaba aquél para pedir pruebas.

Dice la demandante, protestando la decisión, que no ha debido accederse a ese pedimento del demandado, pues la fecha de radicación de las demandas que dieron origen a los procesos en cuestión y la existencia de las deudas que se cobran, son anteriores a la presentación y admisión de la demanda, por lo que bien pudo el demandado postular su

decreto al contestar la demanda, y si no lo hizo, pues su intento de oposición fue extemporáneo, decretarle la prueba sería un premio a su desidia; sobre la renovación en el Rues, además, ha podido indagar en el interrogatorio de parte, sin contar con que, en todo caso, no sólo la hizo en el presente año, sino también en los años anteriores, por modo que pudo acreditarlo con anterioridad; por último, que se diga que Jeimy Johana Pulido Rodríguez, actual compañera sentimental del demandado, tiene cinco meses de gestación, no es prueba de que el *nasciturus* sea el demandado; antes bien, el hecho de que ello haya acontecido antes de que se decretara la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico que los vinculaba, constituye un “matoneo” y “total irrespeto de ella como esposa, como mujer, como madre de sus hijos”, máxime que los bienes que últimamente ha adquirido el demandado los ha dejado a nombre de ésta, con el único propósito de justificar su supuesta insolvencia.

A juicio del Tribunal, sin embargo, las cosas no son así, pues si de acuerdo con el numeral 3º del precepto 327 del código general del proceso, “*las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará*” cuando “*verse sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos*”, pues bien puede suceder que “*se presente un hecho nuevo cuya prueba sea de fundamental importancia para la decisión del caso*”, y “*como lo que se quiere es que el juez resuelva de acuerdo con la realidad, se puede solicitar el decreto y práctica de la prueba de ese hecho nuevo o adjuntar el documento que sirve para demostrar o desvirtuar el hecho nuevo*” (López Blanco, Hernán Fabio; Código General del Proceso; Parte General; Dupre Editores; 2016; pág. 821), es ostensible que, refiriéndose esas pruebas decretadas en el trámite de la apelación, a hechos nuevos ocurridos con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, menester era ordenarlas, al margen de si el solicitante contestó o no la demanda, pues es palmar que si el querer del legislador hubiera sido darles un trato diferente a quienes se guardan de hacerlo, frente a quienes oportunamente se

opusieron a la prosperidad de las pretensiones, así lo habría señalado expresamente.

O sea, de haber sido otro el propósito de la regla, en vez de referirse de modo genérico a que las partes podrían elevar una petición de esa naturaleza en caso de cumplirse una de esas situación previstas en el citado precepto, muy seguramente lo habría hecho; y, ya se sabe, donde la ley no distingue, no es lícito al intérprete hacerlo, pues ello desafiaría la materialidad de la norma.

Ahora, dícese que en este caso se cumplen los presupuestos para la procedencia excepcional del decreto de pruebas en segunda instancia tenga cabida, pues véase que con los documentos correspondientes al cobro prejurídico y los procesos de ejecución promovidos por el demandado lo que se pretende acreditar es la existencia de aquéllos y se trata de un hecho que no podía demostrarse en la oportunidad prevista para ello, pues mientras el término para contestar la demanda feneció el 28 de agosto de 2018, la notificación de la existencia del cobro prejurídico se hizo el 24 de julio de 2019 y los procesos ejecutivos principiaron ese mismo año, al punto que del mandamiento de pago en los procesos 2019-00073, 2019-046 y 2019-00341 sólo fue notificado los días 29 de mayo, 10 de junio de 2019 y 11 de marzo de 2020, respectivamente, lo que demuestra que, en efecto, se trata de documentos que no podían aportarse en ese momento procesal.

Lo propio acontece con la ecografía, pues da cuenta de un hecho reciente que, por lo mismo, autoriza su aducción; claro, al desatar el litigio el juzgador determinará si lo que pretende probarse con ese documento es útil en ese propósito; mas, sabiendo eso, lo apropiado de momento es permitir que el medio de prueba arribe al proceso para luego, cuando sea oportuno, como lo dicta el principio del debido proceso, determinar en qué medida la prueba alcanza los cometidos de la parte que la solicita, sin que pueda oponérsele lo que ello representa para la demandante en relación con el incumplimiento de los deberes por parte de su esposo, pues lo que queda por ahora pendiente es lo

relativo a los alimentos, y en ese quehacer nada de inopinado tiene procurar establecer la capacidad económica del alimentante.

Por lo demás, lo atinente a la renovación del Registro Único Empresarial por parte de la demandante, es algo que también resulta novedoso de cara al momento en que el demandado podía realizar su petición probatoria en el trámite del recurso, pues con independencia de si en los años anteriores también lo hizo, según lo aduce la actora, lo cierto es que con ello se pretende acreditar que para la época en que finalmente se tasaron los alimentos la renovación habíase hecho de forma reciente, cual en últimas se concluyó en el proveído recurrido, lo que significa que éste, en ese orden de ideas, debe mantenerse, como en efecto se hace.

Por lo expuesto, se resuelve:

No reponer el auto de 20 de agosto pasado.

Notifíquese,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:

**German Octavio Rodriguez Velasquez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**e62b379f4ea95a51bc429f1fc06d9aef0494c5beda8d70f5e9
d9fd6e340c23e1**

Documento generado en 08/10/2021 01:33:08 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**